



*AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL*

**MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,  
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL.**

**Medellín, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno**

PROCESO: Verbal (Administración de Valores)

DEMANDANTE: Juan David Ochoa Uribe

DEMANDADO: Correval S.A. y Otro

PROCEDENCIA: Juzgado Diecinueve Civil Circuito de Medellín.

C.U.D.R.: 05001 31 03 014 **2011 00179-01**

Rdo. Interno: 040-20

PROVIDENCIA NRO. 020 /21

**Asunto:** CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA,  
que negó la totalidad de las pretensiones.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en audiencia celebrada el día 4 de agosto de 2020, al interior del proceso VERBAL (Administración de Valores) promovido por el señor JUAN DAVID OCHOA URIBE, en

contra de la sociedad CORREVAL S.A. y el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO.

Se deja acotado que esta decisión se adopta por escrito una vez surtidos los traslados de rigor en esta instancia, acorde con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 que autorizó que las apelaciones de sentencias en las cuales no se practicaran pruebas se hicieran por escrito, tanto para los procesos que venían en curso como para los expresamente cobijados por su vigencia.

Igualmente se deja expreso que se tiene competencia y no se advierten causales de nulidad, lo que hace viable la emisión de esta decisión de fondo, en los siguientes términos:

### **1.0. ANTECEDENTES.**

Revisado el “*cuaderno principal actualizado*” remitido digitalmente, fls. 0 a 923, se extrae lo siguiente:

### **1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

De una manera generalizada se refieren en el libelo genitor hechos de mala administración desde agosto de 2008 hasta febrero de 2009, en desarrollo de un CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES suscrito entre CORREVAL S.A. Y EL DEMANDANTE, siendo el señor

CARLOS MAURICIO RESTREPO un empleado de CORREVAL S.A, quien se encargó de manejar el portafolio accionario del demandante.

El eje central de la demanda es que el demandado actuó SIN AUTORIZACION del demandante en la negociación de varias de sus acciones, quien solo perseguía mantener su patrimonio y lograr algunos dividendos con compra de acciones en ECOPETROL, principalmente; negociaciones que mermaron o menguaron significativamente su patrimonio, causándole enormes pérdidas.

En el libelo, no se especifican bien los hechos dañosos, las negociaciones concretas no autorizadas, y por el contrario lo expuesto es una narración muy generalizada. Se afirman pérdidas generales cuantiosas, pero no se especifican.

Finalmente, se endilga a los demandados incumplimientos contractuales y del código de ética y normas de operaciones bursátiles.

Con fundamento en lo anterior, deprecaron se emitieran las siguientes declaraciones (fls. 05):

PRIMERO: Declarar la existencia del contrato de administración de valores entre las partes.

SEGUNDO: Declarar que el mismo fue incumplido por los accionados.

TERCERO: Declarar que se causaron perjuicios patrimoniales y morales.

CUARTO: Declarar que el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO es solidariamente responsable de los daños y perjuicios sufridos por el demandante.

EN LO PROBATORIO, se pide el interrogatorio de parte, que se reciban varios testimonios, prueba pericial, y documental, incluidos varios correos electrónicos.

### **1.2. DEL TRÁMITE SURTIDO EN PRIMERA INSTANCIA.**

A folios 99 y ss se observa auto de rechazo de la demanda del JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en abril 27 de 2011, el cual fue objeto de los recursos de reposición y apelación; decisión que se repone en junio 22 de 2011, y además se inadmite, exigiendo al demandante concreción en sus pretensiones. El despacho encontró cumplidos los requisitos exigidos y procedió a admitir la demanda.

### **1.3. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

Una vez integrado el contradictorio, los demandados contestaron la demanda en los siguientes términos:

- **CARLOS MAURICIO RESTREPO**

**SINTESIS** (fls. 117 y ss). Frente a los hechos acepta unos, niega otros, y dice que otros no le constan. En esencia, alega que actuó conforme al portafolio y autorizado por su cliente, sin reconocer falta alguna, y sin que pueda CORREVAL S.A. aceptar faltas por él. Dice incluso que CORREVAL realizó unas ventas no autorizadas por otros clientes como la señora ALINA TAMAYO, lo que evidencia que “*actuaba a espaldas*” de todos.

En lo que denominó “*otros hechos*”, dice que el demandante solo estuvo en CORREVAL S.A. dos meses, que luego se fue a otra firma donde laboraba el demandado, quien hizo entrega de paz y salvo a CORREVAL, empresa que fue la que actuó mal.

Objeta que el actor, a pesar de recibir oportunamente sus extractos, solo venga a reclamar dos años después.

**EXCEPCIONES.** (Fl.121): Como tales propuso las siguientes:

- “RATIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR MI MANDANTE”.
- “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD”.
- “PETICION DE LO NO DEBIDO”.

Todos los medios defensivos se afincan en que actuó autorizado por el demandante y en que éste no realizó ninguna objeción o reclamo en desarrollo del contrato y actuación del señor CARLOS MAURICIO, con la acotación que una vez éste se fue a otra compañía de Valores, el actor

libremente optó por irse también a dicha empresa, trasladando su portafolio de CORREVAL S.A., signo de la confianza y aprobación del demandante respecto de su gestión.

- **CORREVAL S.A.**

**SINTESIS** (fls. 138 y ss). Respecto de los hechos, reconoce el contrato de Administración de Valores habido entre esa empresa y el demandante, la entrega de recursos por parte del actor en agosto 31 de 2007, pero se alega que no existe prueba de la *“instrucción puntual que es requerida en estos eventos”* mencionada en el hecho CUARTO de la demanda.

Se reconoce la celebración de algunas reuniones con el señor apoderado de la parte demandante, como se anuncia en el libelo genitor, pero se dice que esos empleados que participaron en ellas no podían comprometer la empresa, y que solo se trataba de solucionar los inconvenientes presentados. Se cuestionan los correos electrónicos solo en su alcance, no en su validez, reiterando que el señor USSE no es Representante Legal de CORREVAL S.A. y por tanto no podía comprometerla.

En el hecho 10 de la contestación se alega que no existe responsabilidad, pues al demandante le fueron remitidas *“las papeletas”*, extractos y otros, sin que el actor presentara alguna objeción en el tiempo en que se desarrolló el negocio.

Se reprochan las expresiones indeterminadas del libelista, al señalar de manera generalizada que sufrió una *“pérdida muy grande, multimillonaria”*, pero sin concretarla.

Alega que sí existía autorización para las negociaciones y se refiere este codemandado a una llamada telefónica, de fecha 22 de octubre de 2007, en la que el demandante autoriza ampliamente al señor CARLOS MAURICIO para obrar a discreción, “*para hacer y deshacer*” respecto de su portafolio, en tanto era éste el que sabía del negocio.

**EXCEPCIONES.** Con fundamento en lo expuesto se formularon las siguientes:

- CUMPLIMIENTO DEL DEMANDADO.
- INCUMPLIMIENTO DEL DEMANDANTE.
- MALA FE
- CULPA DEL DEMANDANTE.
- INCUMPLIR LA BUENA FE.
- CULPA DE UN TERCERO.
- DOBLE INDEMNIZACION.

**PRUEBAS:** en la contestación se dejó consignado lo pertinente, incluido el poder interrogar al perito, se anexó prueba documental y copia en cd de la conversación telefónica mencionada (fl.154).

#### **1.4. DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.**

Este codemandado LLAMA EN GARANTÍA a CARLOS MAURICIO RESTREPO como “PROMOTOR COMERCIAL” DE CORREVAL S.A; llamamiento que fue cuestionado.

A fl. 428, se observa auto de mayo 22 de 2012 mediante el cual el Juzgado reconoce personería, concede recurso de queja, no accede a reposición y da por bien notificado el llamamiento en garantía.

#### **1.5. DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.**

A folio 453, aparece constancia de ejecutoria del auto que declaró no probadas las excepciones previas.

#### **1.6. DE LA AUDIENCIA ARTÍCULO 101 C.P.C.**

A folio 458, se observa constancia del pronunciamiento frente a las excepciones de fondo y se cita a audiencia de conciliación 101 C.P.C. y demás fases propias de esta audiencia (mayo 20 de 2013).

En desarrollo de esta audiencia, visible a folio 486, aparece el INTERROGATORIO DE PARTE DEL DEMANDANTE, quien reconoce que sí le llegaban extractos pero que él no sabía leerlos o

interpretar sus alcances, que CARLOS MAURICIO le decía que iban muy bien, que autorizó para que le compraran y vendieran “*cuando fuera a ganar*”, en ECOPETROL y otras compañías como ENKA, no recuerda bien fechas. Dice que sí recibió en su cuenta dinero de la señora ALINA TAMAYO, y que sí recibió ganancias de 100 millones por venta de acciones de ECOPETROL.

Preguntado por el demandado, afirma que cuando se fue para ALIANZA VALORES, ya sabía del faltante, pero que se fue porque le tenía mucha confianza a MAURICIO, que allí le reconocieron 120 millones, y ya le habían valorizado sus acciones o PORTAFOLIO EN CORREVAL S.A. por 300 MILLONES; y añade que no sabe cuántas acciones se negociaron en ECOPETROL, que se vendieron a un precio más bajo del mercado, “*más bajo que el que tenían en la calle*”.

En la audiencia se agotaron las demás fases como fijación del litigio -sin variaciones-, no se aceptan pruebas documentales del demandante, sin recursos y se decretaron las pruebas solicitadas, incluida la pericial, decisión que no fue objeto de ningún reparo.

A folios 510, se observa el auto de septiembre 25 de 2013, mediante el cual se sanciona al Representante Legal del demandado por inasistencia a la audiencia 101 C.P.C., y en octubre 28 de 2013 se repone la anterior decisión (Página 585).

A folios 645, se observa constancia secretarial de remisión del proceso al JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por cuanto el JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO de la misma municipalidad, comenzaba la oralidad ese día, abril 30 de 2014. Luego el

asunto pasa al JUZGADO CUARTO CIVIL DE DESCONGESTIÓN (fl. 698) y finalmente el JUZGADO DICINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN asume el conocimiento del asunto.

Ya avocado el conocimiento, se tornó difícil lo relacionado con el perito, hasta que finalmente aceptó uno de la Universidad Nacional, quien presentó su pericia denominada “*peritazgo económico bursátil*” (**Folios 214 y ss del cuaderno No. 06 de pruebas de la demandante**). A dicha prueba se le dio el traslado de rigor, según puede verse a folios 231 y siguientes de este cuaderno, en enero 13 de 2020.

### **1.7. DE LAS ALEGACIONES.**

En archivo digital denominado “*MEMORIAL DEL 11 DE NOVIEMBRE*”, se pueden apreciar las alegaciones de conclusión de las partes, así:

**EL DEMANDANTE.** Centra su alegación en avalar el peritaje, amén de decir que en el proceso obra la prueba de la Autoridad Reguladora del Mercado de Valores – AMV- que sanciona al señor CARLOS MAURICIO por actuaciones irregulares, y para ello rememora el trabajo pericial, leyendo apartes de éste.

De la AMV menciona “*ordenes de operaciones falsificadas, por autorizaciones firmadas en blanco*”, “*ventas por valores menores*”, y “*acuerdo de terminación anticipada 138 de 2012*” entre AMV Y CARLOS MAURICIO donde éste confiesa las imputaciones: operaciones por cuenta del cliente sin autorización ni conocimiento de éste, utilizar

formatos en blanco firmadas por el cliente, y en el ordinal i) de la sanción, se dice que el investigado reconoció las infracciones en el proceso disciplinario, por todo lo cual fue sancionado con expulsión, por 20 años.

A CORREVAL le enrostra omitir vigilancia y control de su corredor. Finalmente, reitera la causación de perjuicios materiales, conforme al trabajo pericial, y daño emergente en 700 millones aproximadamente, más los intereses. También se solicitan perjuicios morales.

**CODEMANDADA CORREVAL S.A.** En síntesis presentó así sus alegaciones:

Alega que el punto central del proceso es establecer la Responsabilidad Civil de la demandada.

Luego discurre sobre el dictamen pericial:

En primer lugar, le reprocha al auxiliar de la justicia los juicios de valor emitidos, pues ello se contrapone a lo estipulado en el artículo 226 del CGP.

Se refiere a la forma en que se evalúan las operaciones por el perito, por ejemplo, en precios de mercado, que no corresponden a la realidad, no se sabe de dónde saca el perito las comparaciones; y en operaciones “*repo*”, (lo que explica en su alcance), se afirma que lo relevante no es el precio, sino la “tasa de remuneración” y no como se hizo en el dictamen, amén que el precio de cierre de la bolsa no es el precio de mercado (da ejemplo). Adiciona que esas operaciones fueron conocidas y autorizadas por el

cliente, como un contrato adicional. Cada “REPO” fue contado dos veces por el perito, desconociendo lo anterior.

Agrega que existe la dificultad para concretar cuáles fueron las operaciones específicas en las que hubo malos manejos, lo que dificulta la defensa. Dice que así se ve desde la demanda. Se alega que son más de 1000 (mil) operaciones, pero no todas fueron realizadas sin orden, como lo reconoce el demandante en su interrogatorio de parte.

Se afirma por este codemandado que desde el mismo contrato de administración de valores, se advierten las anteriores inconsistencias, pero el contrato relevante es el contrato para compraventa de valores, donde se ven autorizaciones verbales y escritas, incluso diciéndole “*a su comercial*” (sic) en octubre 22 de 2007 que tenía autorización amplia y el demandante no lo negó: “que me pusiera a ganar y no a perder...que vendiera cuando estuviera más alta para ganar y no para perder..” y esta autorización no fue revocada.

Se adiciona la alegación en el sentido que el demandante firmó formatos de órdenes en blanco, como lo dijo la AMV, lo que es demostrativo de una conducta contractual contraria al cuidado que se espera del cliente.

Así las cosas, se pregunta ¿cómo el perito concluye negligencia? Y ¿cómo pedir perjuicios no causados? ¿Porque cerró su cuenta en CORREVAL y trasladó su portafolio de 300 millones a ALIANZA VALORES para que fueran manejados por el mismo CARLOS MAURICIO? –

Se pone de relieve que el demandante reconoce que recibió información, recibos y demás, diciendo que “yo la guardaba”, desconociendo que él

también tenía carga de control sobre las operaciones y no dijo nada. Se llama la atención sobre 176 autorizaciones escritas dadas por el demandante y la grabación que contiene la orden al corredor para actuar y *“ponerlo a ganar...”*.

Finalmente, dice que hay que recordar que el demandante se llevó 300 millones de CORREVAL S.A. para la otra compañía, ALIANZA VALORES

**CODEMANDADO CARLOS MAURICIO RESTREPO.** Formula críticas al peritaje y luego discurre sobre la responsabilidad civil contractual, destacando la responsabilidad personal. Alude a que las operaciones en acciones son de alto riesgo, que es un negocio fluctuante incluso en el curso del día, sube y baja. Señala cómo el portafolio de 400 millones llegó a valer, en 11 meses, 689 millones.

Alega que el perito no explicó las “operaciones repo”, las que explican las llamadas operaciones por debajo de mercado; que el IPC, y otros indicadores no aplican en el manejo de lo invertido en bolsa, y no se tiene siquiera el número de acciones concretas a valorar (min. 056).

Se dice que el demandante recibía información de CORREVAL S.A. y de CARLOS MAURICIO, en quien se confiaba, sin quejas contra éste.

Finalmente se alega que CARLOS MAURICIO fue sancionado por exceso en el mandato y faltas a la lealtad, pero no hay nada concreto respecto de algunas operaciones en las que se dice no hubo autorizaciones.

Hay “*compensación de culpas*” en caso de condena por la conducta pasiva del demandante; y solo habría una pérdida del 23% del portafolio inicial, incluso por la crisis financiera de esos años 2007-2008.

### **1.8. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.**

Revisado el audio pertinente (1hr.07min y ss), se observa que, agotadas las etapas procesales de rigor, escuchados las alegaciones, procedió el juez a emitir la respectiva sentencia, en los siguientes términos:

Rememora la demanda, donde en forma genérica se narran los hechos y los reproches; señala que los demandados se opusieron, diciendo que hubo autorización para la negociación de las acciones del demandante, y no se presentaron quejas a CORREVAL S.A en contra de CARLOS MAURICIO.

Indicó el A-Quo que estaban satisfechos los presupuestos procesales previos y la garantía del derecho de defensa.

Seguidamente se plantea el problema jurídico: Determinar si se han acreditado los elementos de la acción y, en su caso, de las excepciones; para lo cual alude a la responsabilidad civil contractual; citando la normativa que rige el mercado de valores. Así, se acude entre otras, a la Resolución 400/95 y otras sobre el mercado de valores; el contrato de comisión para la adquisición de valores en los términos de la Ley 45/90, con obligación de entregar extractos y comprobantes o “*papeleta de*

*bolsa*” de cada operación realizada según la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

Destaca que en estos asuntos la obligación es de medio y no de resultado, como lo puso de presente el HTSB, en providencia de septiembre 30 de 2015, con ponencia de la Magistrada LIANA AIDA LIZARAZO.

Luego discurre en concreto sobre EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE VALORES, con citación nuevamente de NORMAS como la Ley 45/90 Y la Resolución 2326 de diciembre 07 de 2010.

Seguidamente alude a la EJECUCIOIN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE VALORES POR PARTE DEL COMISIONISTA; los PROCEDIMIENTOS Y OBLIGACIONES, para concluir que se trata de un MANDATO COMERCIAL, en los términos de los artículos 1262 y siguientes del Código de Comercio.

También aludió a conceptos de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA sobre el CONTRATO DE COMISIÓN, que solo puede llevarse a cabo por SOCIEDADADES; al contrato de Comisión como una especie de mandato sin representación, al artículo 1308 del Código de Comercio, refiriendo la sentencia SC 27 JULIO 2016, sobre ACTOS EXIGIBLES AL COMISIONISTA.

Aunado a lo anterior, se hizo alusión a las reglas de ratificación del mandato en el Código de Comercio, las obligaciones del mandatario de informar la ejecución del encargo, anotando que el silencio del mandante

ratifica el mandato. Así, se ofreció por el A-Quo ejemplos de saneamiento, citando la providencia del HTSB del 24 feb 2016.

A lo anterior sumó el alcance del principio de la coherencia o respeto del acto propio como un límite al ejercicio del derecho subjetivo, para lo cual se apoyó en sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA del 24 enero de 2001, rad. 2457.

Contextualizado así el asunto, procedió el juez de primera instancia a referirse al CASO EN CONCRETO (1H.26min y ss del audio), diferenciando que respecto de CORREVAL S.A, el asunto se enmarcaba dentro de la responsabilidad civil contractual, mientras que en relación con el señor CARLOS MAURICIO el asunto estaba gobernado por la responsabilidad civil extracontractual.

Destacó que en la demanda no se identifican o concretan las operaciones en las que falló el señor CARLOS MAURICIO, que incluso por eso se inadmitió. Seguidamente aludió a las omisiones de CORREVAL S.A, a la carencia de autorizaciones imputadas, las cuales destacó nuevamente como GENÉRICAS, NO CONCRETAS.

Ya en concreto, sobre LA RESPONSABILIDAD DE CORREVAL S.A. POR OMISIONES, volvió sobre el contrato celebrado, no discutido, visible a folios 11 del cuaderno principal, el capital entregado (fl.16), la normativa aplicable, aliviando nuevamente la indeterminación del actor al señalar que producto de los malos manejos de su portafolio se dio una “CUANTIOSA MERMA EN EL PATRIMONIO”.

Sobre el alegado incumplimiento contractual, como “CUANTIOSA MERMA EN EL PATRIMONIO”, coligió el juez de primera instancia (1hra.32 min y ss), que NO SE ESTRUCTURABA, acudiendo para ello a que en el ARCHIVO 02, PAGINA 3. EN AMV se habla de más de mil (1000) OPERACIONES FRAUDULENTAS, como incluso se dice en el dictamen pericial.

Al analizar LA PRUEBA PERICIAL, se anota por el juez de primer grado que fue decretada para cuantificar perjuicios y calcular rendimientos dejados de percibir, por lo cual no podía el auxiliar de la justicia emitir juicios de responsabilidad; anotando que en todo caso la valoración del juez es autónoma sobre tal medio probatorio como lo dijo por ejemplo la CORTE CONSTITUCIONAL en la sentencia C- 124 DE 2011.

Citando los artículos 1266 y 1287 del Código de Comercio, recalca sobre el mandato y la posibilidad de su ratificación, aun ante un exceso en el ejercicio del mandato; y ubica en el caso concreto que el demandante realizó tal ratificación según la prueba obrante en el proceso (folios 130 y ss del cuaderno 1, físico, incluido su interrogatorio de parte, “archivo 7. Página 5”).

Coligió entonces que al demandante sí le notificaron los movimientos efectuados en su portafolio, sin que manifestara inconformidades; que COOREVAL S.A. también le advertía que si se observaba alguna irregularidad lo notificara y no se hizo. Solo después de terminado el contrato con CORREVAL se formularon las inconformidades, anotándose que incluso en la llamada telefónica a que se ha hecho alusión, audio minuto 2.15, el demandante le expresó al señor CARLO MARIO *que “haga y deshaga...en enka...” que tan buen hombre, el que sabe, sabe”*.

Continúa el JUEZ diciendo que el demandante fue descuidado, pues le notificaron los movimientos efectuados sin manifestar inconformidades; incluso nuevos contratos con CORREVAL en 2008, además de irse a ALIANZA VALORES con CARLOS MAURICIO, por lo cual no prosperan las pretensiones; todo aunado a que según el artículo 1270 del Código de Comercio la ratificación de esas transacciones vale, aunque no hubiesen existido las autorizaciones (1H.47min y ss del audio contentivo de la audiencia).

En cuanto a los resultados del proceso disciplinario y las firmas en blanco, se coligió que el demandante se prestó para ello y no puede ahora valerse de tal conducta, amén de que esa responsabilidad es sustancialmente distinta y no puede extrapolarse a este proceso.

Añade, reiterando que las alegadas operaciones fraudulentas no fueron suficientemente explicadas, no se concretó el daño al patrimonio del demandante y menos se probó el mismo.

Concluye en definitiva que no prospera la acción y pretensión de responsabilidad civil contra CORREVAL S.A. Enfatiza en la generalidad del menoscabo “*perdida muy grande...*” solo “*subsanada*” al cumplir requisitos de inadmisión.

Además, cuestiona la conducta del demandante de no advertir que se le habían devuelto 300 millones y que recibió réditos por 5 millones mensuales en desarrollo del contrato de administración de valores (1H.57 min y ss).

SOBRE LA RCE CONTRA CARLOS MAURICIO. ELEMENTOS. (1H.58 min y ss del audio que contiene la audiencia), encontró que respecto de este codemandado el asunto debía definirse bajo los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, anotando inclusive que no se explicaba por qué se había demandado así, siendo este codemandado un empleado de CORREVAL S.A.

Anotó el Juez de primera instancia que todo derivaba del contrato de administración de valores, celebrado entre el demandante y CORREVAL S.A., por lo que en principio tal relación es solo entre el demandante y CORREVAL; sin que por lo demás se fundamente la solidaridad reclamada entre los codemandados y ese Despacho no advertía excepciones al principio de relatividad de los contratos.

De todas maneras, estudiando el asunto, dice el Juez, que desde el principio de la carga de la prueba prevista en el artículo 167 del CGP, no se acreditan los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, pues el daño proviene de la propia conducta del demandante, amén de la ratificación del mandato. Recuerda el juez que el demandante se trasladó a ALIANZA VALORES, con el mismo asesor CARLOS MAURICIO a quien ningún reclamo le había hecho, de lo cual infiere que no existió conducta antijurídica de este, pues el demandante permitió su actuar, lo toleró y además saneó o ratificó cualquier desvío del mandatario CARLOS MAURICIO.

Coligió igualmente que el daño tampoco fue evidenciado, por lo ya expuesto al estudiar la responsabilidad de CORREVAL S.A., esto es, dada la indeterminación, vaguedad, y no concreción de éste.

Como CONCLUSIÓN (2h.06 min y ss) de todo lo expuesto se consigna que lo probado es una conducta silente, saneadora, convalidadora y por eso no prosperan las pretensiones en contra de ninguno de los demandados.

Condena en costas al demandante JUAN DAVID OCHOA URIBE y al Dr. HECTOR JAIME TOBÓN por la cesión de derechos litigiosos que se le hizo y fija la suma de diez millones de pesos (\$10.000. 000.00) como agencias en derecho.

### **1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.**

En su intervención ante el A-Quo, a manera de **reparos concretos**, la parte actora se duele de la interpretación del contrato, que en criterio debió hacerse a su favor, aunque sin entrar a sustentar de fondo tal afirmación, y pone de presente que el demandante no podía convalidar los recibos, extractos y demás que recibía de los demandados, pues era inexperto en la materia.

CORREVAL S.A. manifestó que estaba “completamente de acuerdo” con la sentencia emitida.

En esos términos el -A-Quo concede apelación en el efecto suspensivo.

LA SUSTENTACION EN ESTA INSTANCIA. LA INTEREVENCION DEL NO RECURRENTE.

En la debida oportunidad procedió el apelante a sustentar así la apelación: en primer lugar, puso de presente que inicialmente su manifestación fue corta por la premura del tiempo y lo extenso de la sentencia, de la que destaca no contiene una acertada aplicación normativa.

Seguidamente insiste en que dado lo anterior, el A-Quo no interpretó bien el libelo, el que denomina contrato de comisión, en favor del demandante, pues la actividad bursátil es riesgosa, especialmente reglamentada, donde hay que interpretar en favor del “cliente”, “*donde la carga de la prueba se traslada al primero*” (demandado) pues la comisionista es la experta y conocedora en la materia.

Sobre este punto anota esta Sala, sin dejar de lado que la actividad bursátil es riesgosa, dada la dinámica propia que la misma comporta, con variaciones del valor de las acciones no previsibles de una manera cierta, ello no conlleva a que se pueda catalogar la actividad como “peligrosa” ni a que entonces se altere o modifique la carga de la prueba, como lo establece el artículo 167 del CGP, lo que suficiente para denegar este reproche; no sin antes agregar que tampoco se trata de un contrato de adhesión, pues “el cliente” o inversionista es quien libremente decide si invierte o no, en qué va invertir su dinero, y es quien autoriza las transacciones, estando siempre el corredor o comisionista sujeto a esas órdenes, como lo pone de presente la extensa normativa relacionada incluso por el apelante sobre la materia y como lo evidencia del contrato de administración de valores anexo a la demanda.

Entonces, no siendo el contrato de adhesión, no hay lugar a considerar que existe una parte “débil”, el cliente o inversionista; y otra parte “fuerte”, en

este caso CORREVAL S.A. o su agente el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO ARANGO, y todo ello conlleva a que no salga adelante el reproche dirigido a que el contrato debió ser interpretado en favor del actor.

Si bien esta actividad y el contrato tienen regulación especial y aunque el comisionista tiene deberes especiales de cuidado frente al cliente, como de asesoría y abstención, en tanto es el experto en la materia, de todas maneras en cada caso específico es necesario satisfacer la carga probatoria pertinente, en este caso, acreditar que el demandado actuó sin autorización y que se causó un daño específico y concreto, cuantificado, en el patrimonio del demandante, lo que no hizo el accionante.

A continuación, se cuestiona por qué no se dio aplicación al artículo 210 del CPC dada la inasistencia del demandado a la audiencia de conciliación, aspecto que no fue tratado en primera instancia y que a su juicio podría haber cambiado el sentido del fallo.

Sobre este reclamo, baste con decir que no fue planteado en los reparos, lo que impide que se aborde ahora en esta instancia.

Luego discurre ampliamente sobre la solidaridad entre los codemandados, citando las normas de las que a su juicio surge la misma; y añade que en este caso es clara la responsabilidad del codemandado CARLOS MAURICIO RESTREPO, agente comercial de CORREVAL S.A., como se extrae de la decisión de la AUTORREGULADORA DEL MERCADO DE VALORES—AMV-, quien sancionó al señor CARLOS MAURICIO con expulsión de veinte (20) años del mercado de valores.

De esta alegación, baste con decir que la misma tampoco fue anunciada en los reparos concretos, y por tanto no es dable asumirla en esta decisión.

Retoma el apelante el “contrato de administración de valores” anexo con la demanda, para insistir en que su finalidad era obtener ganancias con su inversión, no pérdidas, las cuales, a su juicio, fueron producto de la “especulación” de los codemandados, todo lo cual deja claro que hubo el incumplimiento contractual alegado, e insiste en que CORREVAL S.A. aceptó o confesó los malos manejos de su agente comercial CARLOS MAURICIO RESTREPO, según correo electrónico que obra como prueba.

Añade que no pueden existir órdenes abiertas e indefinidas para las transacciones y procede a relacionar las que a su juicio rigen el mercado de valores, y los deberes de los intermediarios en este mercado, especialmente de información y asesoría.

Sobre estos dos puntos anteriores, la conclusión del A-Quo fue acertada, pues la parte demandante no cumplió con su carga probatoria al tenor del artículo 167 del CGP, esto es, no logró acreditar un incumplimiento contractual concreto, unos daños específicos, ni un monto o perjuicio concreto, quedándose en que se le causaron “enormes pérdidas”; amén de que, también lo dijo atinadamente el juez de primera instancia, en el proceso existe prueba de que sí se dieron las autorizaciones, verbales y escritas, aunadas a la llamada telefónica del 22 de octubre de 2007 que hizo el demandante al demandado CARLOS MAURICIO, a través de la cual lo autorizaba para que invirtiera su portafolio “como quisiera” dado que éste era quien sabía del negocio.

A esta altura, alude al dictamen pericial desechado en primera instancia, destacando que el mismo no fue controvertido, por lo cual adquiere firmeza y mérito probatorio; y luego refiere que su afirmación de no existir las autorizaciones hacía que fuera el demandado quien tuviera la carga al respecto, poniendo de presente nuevamente la inasistencia del codemandado CORREVAL S.A., a la audiencia y la no sanción prevista en el artículo 210 del CPC.

Finalmente se refiere a la responsabilidad del deudor en los términos del artículo 1604 del código civil, y reprocha el razonamiento del juez de primera instancia al no encontrar acreditado el incumplimiento.

**EL NO RECORRENTE CORREVAL:** Alegó pronunciamiento acerca de la apelación, en los siguientes términos:

Cuestiona el que apelante alegue que el A-Quo no aplicó bien las normas que rigen su contrato, el que, como se dijo en la misma demanda y así se anexó, fue un CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES, y no de comisión como lo denomina ahora el recurrente.

Añade, no obstante, que cada una de las operaciones que emite el cliente comportan un contrato de comisión, de la cual se generan compraventas, reiterando en este acápite la indeterminación del demandante en señalar unas operaciones concretas en las cuales se haya actuado sin su autorización y la falta de concreción en la cuantía del alegado desmedro patrimonial, como puede advertirse desde la demanda, tal y como fue advertido también por el juez de primera instancia, siendo que tales operaciones y contratos de compraventa superan los mil (1000).

También se refiere al régimen aplicable, para decir que es de responsabilidad civil contractual, y que no obstante el apelante entremezcla conceptos propios de la responsabilidad civil extracontractual para calificar la actividad bursátil como riesgosa o peligrosa; anotando que lo que se ha exigido al actor es que identifique o concrete los daños respecto de unas operaciones accionarias específicas, siendo necesarios distinguir los resultados negativos propios del mercado accionario, de valores, de los que resultan del incumplimiento contractual como tal.

Finalmente puso de presente la autonomía judicial en la valoración probatoria, incluido el dictamen pericial al que tanto alude el apelante como sustento de sus pretensiones, recalcando en la valoración en conjunto de la prueba.

## **2.0. CONSIDERACIONES.**

El Despacho advierte que el proceso no presenta ninguna causal de nulidad, lo que aunado a que se tiene competencia en segunda instancia, permite la emisión de esta sentencia de fondo.

Se acota igualmente que esta decisión se adopta por escrito, previos los traslados de rigor a las partes, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, aplicable tanto a los procesos que venían en curso como a los expresamente cobijados por la vigencia de esta norma.

### **2.1. CASO CONCRETO. PROBLEMA JURÍDICO**

Inmersos en un CONTRATO DE ADMINISTRACION DE VALORES que no se ha puesto en discusión por ninguna de las partes, suscrito entre CORREVAL S.A como COMISIONISTA DE BOLSA y del demandante, donde el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO actuó como “agente comercial” de CORREVAL.S.A; y acorde con la limitación del Superior para decidir con apego a lo que fue el motivo de inconformidad del apelante, artículo 328 del CGP, surgen como problemas jurídicos determinar si la sentencia de primer grado es acorde a lo probado, o si como lo alega el recurrente, la misma no está ajustada a derecho por no realizar una interpretación contractual en favor del apelante, “parte débil”, sin tener en cuenta que el actor, inexperto en la materia, no podía entender y menos convalidar las informaciones que a título de extractos, verbal, y otros que recibió de los codemandados, manteniéndose entonces su posición de que los accionados actuaron sin su autorización en la compraventa de acciones, generando gran daño a su patrimonio económico.

Normativamente el contrato se encuentra regulado por la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores, Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, Resolución 1795 de 2012 de la Superintendencia Financiera, Resolución 1812 de 2012 de la Superintendencia Financiera, los Artículos 1262, 1287 a 1311 del Código de Comercio, y Artículo 7 de la ley 45 de 1990.

Examinado el asunto, lo que se colige y se anunció en párrafos anteriores, es que la apelación no tiene vocación de prosperidad, bastando para ello con rememorar las consideraciones del A-Quo en el sentido que estaba

acreditado el contrato mencionado, al que se le aplicaban las normas del contrato de mandato en lo pertinente, y las normas especiales que rigen la materia, del cual surgían obligaciones de medio y no de resultado, y que igualmente, la actuación del mandatario bien podía ser saneada por el mandante, en este caso el accionante, como en efecto ocurrió.

Recuérdese que el reproche del apelante contra la sentencia de primera instancia se hizo consistir en que se había realizado una interpretación del contrato que no atendía a que el demandante era la parte débil y en tal razón no era capaz de entender los extractos y demás informes que los codemandados le enviaban, sin negar los mismos y por el contrario aceptándolos en su interrogatorio de parte.

La inconformidad primera del recurrente queda descartada pues no existe en el contrato de administración de valores habido entre las partes esa asimetría, disparidad, o desbalance que permita colegir una situación dominante de parte del corredor de bolsa y su agente respecto del demandante, y la ley tampoco hace esa clasificación que lleve a asumir este contrato como uno de los denominados “de adhesión”.

Por el contrario, lo que se advierte, y así lo coligió el Juez de primera instancia, es una relación de confianza entre las partes, en virtud de lo cual el demandante dejó en manos del señor CARLOS MAURICIO, agente comercial de CORREVAL.S.A, la ejecución de ese CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES, para la compra y venta de acciones, con el connatural fin de obtener ganancias, lo que incluso ocurrió en un periodo del contrato, cuando las acciones del actor llegaron a valorizarse en mucho, pasando de 400 millones a 600 millones y algo más, solo que en la dinámica del mercado bursátil volvieron a bajar.

Igualmente es muestra de ese equilibrio contractual, las informaciones que se le daban al demandante tanto por CORREVAL S.A. y CARLOS MAURICIO RESTREPO, mediante el envío de extractos, informaciones verbales, acerca de cómo iba el negocio, las inversiones, llegando a generar tal confianza en el accionante, quien en llamada telefónica de octubre 22 de 2007, no cuestionada por el actor, éste le expresó al demandado CARLOS MAURICIO que bien podía actuar conforme considerara mejor para sus intereses, “*que hiciera y deshiciera*”, pues era el agente comercial el que sabía del asunto; anotándose que este medio probatorio no fue objeto de reproche alguno, por lo cual adquiere mérito probatorio en tanto aparece provisto de la presunción de autenticidad establecida en el artículo 244 del CGP, cuando establece que se presumen auténticos, entre otros, “*los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen*” “*mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el caso*”.

Es claro en este tipo de negocios bursátiles que bien puede ocurrir que el inversionista no sea experto en la materia y es por eso precisamente que contrata con quien o quienes sí lo son, sin que ello signifique que exista una parte débil y otra dominante, pues la relación es concertada, el objeto de la misma depende de lo ordenado por el inversionista, ciñéndose el comisionista a ejecutar ese mandato en la forma dada, siempre con la autorización del accionista, como ocurrió en este evento.

Como se dijo en párrafos anteriores, si bien esta actividad y el contrato tienen regulación especial y aunque el comisionista tiene deberes especiales de cuidado frente al cliente, como de asesoría y abstención, en tanto es el experto en la materia, de todas maneras en cada caso específico

es necesario satisfacer la carga probatoria pertinente, en este caso, acreditar que el demandado actuó sin autorización y que se causó un daño específico y concreto, cuantificado, en el patrimonio del demandante, lo que no hizo el accionante.

Refuerza lo anterior el hecho confesado por el demandante de tener mucha confianza con el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO, con quien incluso trasladó su portafolio desde CORREVAL.S.A hacia ALIANZA VALORES, donde sus recursos siguieron en manos del señor CARLOS MAURICIO; con la acotación que ya en CORREVAL S.A le habían liquidado un monto de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos).

Entonces, ninguna prueba existe de la alegada desigualdad contractual, de una parte débil y otra dominante, pese a la inexperiencia que pudiera tener el demandante en el negocio bursátil, por lo cual la apelación deviene impróspera.

Finalmente, debe acotarse que el juicio del juez de primera instancia es acertado cuando coligió que no se había probado que los codemandados hubiesen actuado desconociendo al demandante, o no autorizado por éste, pues la prueba que se valoró por el A-Quo da fe de lo contrario, esto es, de que sí se dio tal autorización por parte del actor, como lo ponían de presente las autorizaciones en blanco, la llamada telefónica a que se ha hecho alusión, y los extractos que periódicamente le enviaban al accionante, quien así lo reconoce en su interrogatorio de parte.

Ahora, con independencia de que se comparta el juicio de primera instancia en el sentido que la relación del actor con el señor CARLOS MAURICIO RESTREPO, “agente comercial” se regía por las normas y

principios de la responsabilidad civil extracontractual, lo cierto es que, como lo dijo el A-Quo, al no estar probado el hecho imputado central de haber obrado los codemandados sin autorización del actor y al haber éste saneado el eventual exceso en el mandato, la acción devenía, y deviene impróspera.

Ahora, el que este codemandado haya aceptado su responsabilidad disciplinaria, a manera de acuerdo, que dio lugar a una sentencia anticipada, no es prueba suficiente de la responsabilidad de los codemandados, analizada la prueba en conjunto, pues su dicho, vertido en esas especiales circunstancias de acuerdo ante la AMV, se contrapone a lo que arroja la demás prueba y que en definitiva permite colegir, como lo hizo el A-Quo, en que sí existieron las autorizaciones, que hubo ratificación o saneamiento de las actuaciones de este codemandado, y que no se probó la cuantía del daño.

Corolario de todo lo expuesto es que la apelación no tiene vocación de prosperidad y en consecuencia se impone CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

## **2.2. COSTAS.**

El apelante será condenado en costas al tenor de lo establecido en el artículo 365 del CGP y como agencias en derecho se fijará el equivalente a dos (02) SMLMV, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, artículo 6 numeral 1.1., vigente para cuando se presentó la demanda en el año 2011.

Las costas serán liquidadas de manera concentrada en el despacho de primera instancia, al tenor de lo establecido en el artículo 366 del mismo estatuto procesal.

Así las cosas, la Sala Tercera de Decisión Civil del H. Tribunal Superior de Medellín Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**F A L L A:**

**PRIMERO:** Se deniega la apelación y se CONFIRMA la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado diecinueve civil del circuito de oralidad de Medellín, donde funge como demandante el señor y como codemandados CORREVAL S.A., y CARLOS MAURICIO RESTREPO ARANGO.

**SEGUNDO:** Se condena en costas en esta **instancia** al apelante. Como agencias en derecho se fija el equivalente a dos (02) SMLMV. Las costas serán liquidadas de manera concentrada en el despacho de primera instancia, al tenor de lo establecido en el artículo 366 del mismo estatuto procesal.

**TERCERO:** En firme esta decisión, devuélvase el expediente híbrido al Juzgado de Origen para lo de su competencia, y archívese lo actuado en esta instancia.

**CUARTO:** Esta sentencia se firma de manera digital o escaneada, acorde con lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020.

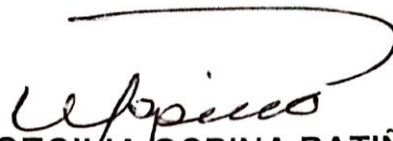
## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,



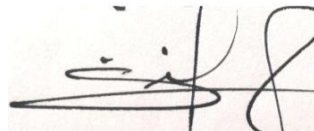
**CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA**

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)  
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)  
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



**JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO**

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)  
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

**C.U.D.R. 05001 31 03 014 2011 0179 -01**